

El Salvador proceso

informativo semanal

año 9
número 384

mayo 17
1989

ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- La salida de los lisiados
- A la derecha de ARENA
- Represión y movilización de las organizaciones populares
- Campaña del FMLN contra ARENA
- Amenaza de aumento en el pasaje de los buses
- ¿Qué hacer con Panamá?

La salida de los lisiados

A ARENA aún le falta mucho trecho por andar para que en el seno de la comunidad internacional sea recibido como partido civilizado y democrático, no sólo por el estigma de escuadronero que arrastra tras de sí sino por el guerrerismo descarnado con que a diario sorprenden sus altos dirigentes y funcionarios públicos. En esta línea, el vergonzoso escándalo de pretendido celo jurídico político con que los areneros, junto a algunos militares, se han opuesto al salvoconducto concedido por el Presidente Duarte a una centena de lisiados de guerra del FMLN para que reciban atención médica en el extranjero, es sólo una cuenta más del largo rosario de torpezas con que aquéllos se exhiben a nivel nacional e internacional.

Esta disposición de ARENA no sólo desdice de su retórica en favor del diálogo como mecanismo de solución al conflicto sino que es un claro y preocupante retroceso respecto de los mínimos avances logrados en materia de humanización durante nueve largos años de guerra. Como se ha estado repitiendo, no será ésta la primera vez que se conceda salvoconducto a lisiados para que reciban atención especializada en el exterior. Es más, cuando el gobierno inició este tipo de gestos humanitarios y humanizantes fue con ocasión del secuestro de la hija del Presidente, oportunidad en la que también se liberó a algunos prisioneros políticos, cosa que hoy no se da; y en aquel momento, para descrédito de los oblusos areneros, logró imponerse el buen juicio político del Mayor D'Aubuisson, quien sostuvo que "todo lo que el Presidente pueda hacer para garantizar la vida de su hija debe hacerlo, y nosotros lo apoyamos plenamente. En nuestro país ya hemos tenido algunos antecedentes de dejar libres a algunos capturados de la guerrilla, por lo cual ese principio ya no es punto de honor aquí".

Independientemente de que existan precedentes sobre la materia en el país, el derecho internacional humanitario, del cual El Salvador es signatario, obliga a la concesión del salvoconducto en cuestión, tanto a éste como al próximo gobierno, no una vez sino cuantas veces sea necesario. Porque el problema de los lisiados, en principio, no es de orden jurídico, político o militar sino esencialmente humano y religiosamente cristiano. Tras esta peligrosa actitud de importantes sectores de ARENA subyace un delicado problema, que deberá ser de los primeros a tratar por el gobierno entrante. En el país, como se ha dicho, se requirió del secuestro de la hija del Presidente y del coronel Avalos para que tuvieran una aplicación el Protocolo adicional II y Art. 3 común a

los convenios de Ginebra los Protocolos II y III adicionales a los Convenios de Ginebra, tanto en favor de caídos en combate de la insurgencia como para garantizar la vida de familiares de militares, de funcionarios públicos y de los rebeldes; hechos que dieron lugar a los "pactos" entre el FMLN y Gobierno-Fuerza Armada, a los que ambigüamente aludiera el Lic. Rey Prendes. Probablemente, desconociendo tales pactos, el gobierno enraute quiera descubrir por propia experiencia el enorme valor e importancia que reviste en un país en guerra el respetar siquiera en grado mínimo dichos Convenios, aun cuando se practiquen bajo la modalidad de pactos.

Con este retroceso en la humanización del conflicto, por otro lado, se pretendería ser más efectivo en la marcha de la guerra, cuando sólo se conseguirá empeorar sus costos. Y las razones de fondo para adoptar conducta tan cavernícola, ciertamente no serían de orden jurídico ni constitucional, como una vez más pretexto ARENA, sino que tendrían su base en la precariedad de la lucha contrainsurgente desarrollada por el ejército y la moral extremadamente baja que aparentemente estarían padeciendo sus tropas. El coronel Ochoa Pérez fue muy explícito en confirmar los temores de que con tal medida el FMLN tendrá mayores facilidades de operar, al tiempo que sostuvo que esto bajará la moral de la tropa. Bastante baja será la moral en las filas del ejército si por la concesión del salvoconducto a estos lisiados (que muy probablemente hasta sean hermanos y familiares de los mismos soldados en los que se excusa actitud tan inhumana) llegan a caer en franca desmoralización; y bastante precaria será la operatividad y eficacia del ejército cuando pretende apoyarse en la desventaja que supone para el FMLN brindar cuidados a sus combatientes impedidos. Conducta que resulta todavía menos comprensible si se contrasta con el optimismo ilimitado con que la propaganda del COPREFA canta victoria sobre un FMLN presuntamente derrotado y desarticulado.

Sobre los extravíos jurídico-políticos del Fiscal y presidencia de la Asamblea Legislativa, al pretender celebrar antejuicio en contra del Presidente Duarte, cabe observar que nada mejor para éste que, en los últimos días de su gobierno y quizá de su vida, termine emplazado y acusado por mantener una actitud humana y cristiana. Quienes en su cortedad así pretenden dañarle ni siquiera se percatan del enorme favor que le harían.

Tesoneros esfuerzos habrá de desplegar el electo presidente Cristiani para mantener en el exterior un mínimo de credibilidad para su gobierno y mayores aún los tendrá que realizar para contener el desatinado guerrerismo en sus correligionarios.

A la derecha de ARENA

Mientras el Presidente Duarte intenta reponerse de la novena sesión de quimioterapia que recibiera a finales de abril en el hospital Walter Reed y la comisión de prensa y comunicaciones del protocolo especial para la transmisión del mando presidencial ha empezado a divulgar el programa procológico que normará el traspaso del poder Ejecutivo el 1 de junio, la espiral de polarización que se ha suscitado tras el triunfo de ARENA el 19 de marzo no ofrece visos de amainar.

El FMLN no sólo ha reiterado que dedicará todos sus esfuerzos a ofrecer a Cristiani un país ingobernable, sino que, además, a partir del 10 de mayo ha iniciado la maniobra nacional denominada "Todos contra ARENA a luchar por la paz", como una medida de "respuesta a la política de represión y a las medidas económicas antipopulares que ARENA y la 'landona' están impulsando". Junto a ello, parece decidido también a profundizar sus gestiones diplomáticas en favor de su proyecto político, como lo muestra la reciente visita que una delegación de su comisión político-diplomática efectuó a la ONU a principios de mayo (Proceso 383).

ARENA, por su parte, si bien ha rebajado el tono de su retórica en comparación con las declaraciones que su dirigencia formuló con ocasión del atentado contra la residencia del Vicepresidente electo Merino y el asesinato del Fiscal General, ha advertido reiteradamente que no andará con "paños tibios" si el FMLN persiste en sus anunciados propósitos de desestabilización. Como no podía menos de ser, la figura areñera que se ha pronunciado públicamente con mayor vehemencia en tal sentido ha sido el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, coronel Sigifredo Ochoa Pérez, quien ha interpretado la anunciada ofensiva del FMLN contra ARENA

como "un ataque terrorista directo al pueblo salvadoreño" ante el cual "el pueblo salvadoreño tiene que dar una respuesta y ahora más que nunca es necesario que se forme un frente unido interno para defenderse de la agresión marxista". En la misma línea, también el presidente de la Asamblea, Lic. Ricardo Alvarenga Valdivieso, ha venido emitiendo en las últimas semanas diversas declaraciones desafortunadas, primero sobre el atentado contra la residencia de Merino y el asesinato del Fiscal, y más recientemente sobre la anunciada evacuación de los lisiados de guerra del FMLN. Independientemente de la censura que pueda merecer desde un punto de vista ético, el atentado perpetrado contra su residencia el martes 16 de mayo, del cual se habrían responsabilizado los comandos urbanos del FMLN (a diferencia de lo acontecido con la residencia de Merino y la muerte del Fiscal), podría interpretarse como una advertencia del FMLN al Lic. Alvarenga Valdivieso para que rectifique la política anti-popular que ha venido avalando desde la presidencia del Órgano Legislativo.

Habría que esperar a ver la postura más oficial que ARENA adoptará frente a la estrategia de desestabilización desplegada por el FMLN en su contra, sobre todo si éste profundiza su línea de ataques personales contra la dirigencia de dicho partido. Con todo, es significativo que, de momento, todavía continúe al interior de las filas areneras la acre polémica que desde hace varios meses se ha venido dando en torno a la estrategia a seguir para enfrentar al movimiento revolucionario.

Aparientemente, el control formal de las estructuras partidarias parecería seguir en manos del sector "civilista"; el signo más reciente de ello sería la designación del Dr.

Armando Calderón Sol, alcalde de San Salvador, como presidente del partido, en sustitución de Cristiani, decidida durante la reciente asamblea nacional de ARENA, realizada el 23 de abril. La propia gira que Cristiani efectuó en la primera semana de mayo por Honduras, Costa Rica y Guatemala, con cuyos mandatarios se entrevistó, favorecería también el proceso de moderación que pudiera estarse dando en la dirigencia de ARENA, en la medida en que, ya en contacto con la realidad a que se enfrentará a partir del 1 de junio, Cristiani ha de ver las cosas cada vez con mayor pragmatismo. De otra parte, sin embargo, todavía subsisten a la derecha de Cristiani, tanto dentro como fuera de ARENA, grupúsculos recalcitrantes que desearían retrotraer al partido a su vieja tradición escuadronista. La expresión más reciente de este sector la constituye la misiva que, bajo el pseudónimo de "Juan Arena", envió la "vieja guardia" del partido al Mayor D'Aubuisson a mediados de abril, instándolo a retomar las riendas partidarias y saldará cuentas con todos los areneros oportunistas que estarían desnaturalizando los principios ideológicos originales del partido. En tales términos formulaba la "vieja guardia" arenera sus reclamos, que durante la asamblea del 23 de abril el propio D'Aubuisson respondió que quienes redactaron tal misiva "no piensan que de hace diez años para acá mucho ha cambiado", al tiempo que les reprochó que con tales exhortaciones le hacían un mal personal en lugar de beneficiar políticamente su figura.

Tales críticas no son en modo alguno nuevas; vienen de varios meses atrás. Ya en julio pasado, el Rev. Ricardo Fuentes Castellanos deploraba el deterioro experimentado por los principales valores contenidos en el ideario de ARENA (Cf. El Diario de Hoy, 7 de

julio de 1988). Por los mismos meses, el dirigente cafetalero y presidente de la auto-denominada Cámara de la Libre Empresa, Orlando de Sola, se lamentaba de la evolución sufrida por ARENA, un partido "que originalmente se autodenominaba conservador, pero parece haber caído en la trampa de convertirse en perfeccionador del socialismo" ("Arena movediza", El Diario de Hoy, 7 de junio de 1988). El tenor de la misiva suscrita por "Juan Arena", pues, no es en modo alguno novedoso. Por el contrario, expresa el discurso ideológico de cierto grupúsculo de ultraderecha que estima que la dirigencia actual de ARENA no tiene suficientemente claros los ideales del partido o, por lo menos, no actúa consecuentemente con ellos.

Desde luego, es descabellado suponer que un empresario con la trayectoria de Cristiani pueda estar traicionando los principios de ARENA. Aun a título de puro detalle anecdótico, no puede pasarse por alto que, durante su última gira por Estados Unidos, Cristiani viajó acompañado, entre otros, según información del *Diario Latino*, por Guillermo "Billy" Sol y Ricardo "Rick" Valdivieso, miembros fundadores de ARENA según el periodista Craig Pyes (*Salvadoran Rightists: The Deadly Patriots*, Albuquerque Journal, December 1983). Pero ni siquiera Cristiani o Calderón Sol están exentos de toda sospecha "socializante" para quienes consideran a Bush como colaborador del expansionismo soviético, son capaces de concebir una "convergencia" entre Estados Unidos y la URSS o imaginan que la CIA y la KGB complotan amistosamente para colocar a El Salvador bajo las garras del comunismo a través de la estrategia de guerra de baja intensidad (Cf. entre una numerosa como alucinante bibliografía: Or-

lando de Sola: "El CBI: ¿éxito o fracaso?", Diario de Hoy, 27 de diciembre de 1988; "¡Somos una república, no una democracia!", Diario de Hoy, 11 de enero 1989; "No necesitamos la ayuda norteamericana", Diario de Hoy, 19 de enero de 1989; "La traidora intervención de Bush y Quayle", Diario de Hoy, 10 de marzo de 1989. Edgar Chacón: "La dictadura del bipartidismo norteamericano", Diario de Hoy, 1 de julio de 1988; "1989. Año del pragmatismo bipartidista y la perestroika", Diario de Hoy, 2 de enero de 1989; "La cumbre del entreguismo", Diario de Hoy, 12 de enero de 1989. Carlos Raúl Calvo: "La nueva diplomacia de EUA", Diario de Hoy, 6 de julio de 1988; "¿Luchamos para perder?", Diario de Hoy, 20 de julio de 1988; "Sustituyendo la victoria por la derrota", Diario de Hoy, 5 de septiembre de 1988. Ricardo Fuentes Castellanos: "Las contradicciones de la estrategia norteamericana", Diario de Hoy, 18 de agosto de 1988", etc., etc.).

Es significativo que a tal grupúsculo fanatizado pertenezca precisamente la mayoría de los integrantes de las efímeras "defensas civiles patrióticas", que el comandante de la Primera Brigada de Infantería, coronel Juan Orlando Zepeda, juramentó el 6 de mayo pasado. Según lo manifestó el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, coronel René Emilio Ponce, las nuevas defensas civiles habrían llamado la atención porque sus integrantes "son personas de fuerte capacidad económica". En realidad, más que por su capacidad económica, los flamantes patrulleros cuyas imágenes presentó la televisión llamaron la atención por su trayectoria caracterizada por un anticomunismo patológico, como es el caso del presidente del autodenominado Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), Edgar Chacón, y de otras figuras desprestigiadas

de la ultraderecha, a cuyas paranoias suele dar tan cálida acogida el periodismo porcino de El Diario de Hoy.

Afortunadamente, la ocurrencia del coronel Zepeda encontró un generalizado repudio, no sólo de parte de diversos sectores democráticos del país, sino incluso del propio Presidente Duarte, quien en declaraciones ofrecidas a la prensa el 11 de mayo manifestó que es preocupante "ver en televisión a gente que ha hablado de matar y aniquilar, ahora uniformada, con rifle e integrada a fuerzas paramilitares. Esto puede generar una estructura de escuadrones de la muerte". En declaraciones ulteriores, Duarte añadió que, aunque no se opone a la actividad de las defensas civiles, "existe el peligro de que se cree un tercer ejército y eso la Fuerza Armada no puede permitirlo". A results del clima de opinión adverso encontrado por la nueva red paramilitar, el viernes 12 de mayo, durante la inauguración del nuevo hospital militar, el ministro de defensa, general Carlos Vides Casanova, anunció la disolución de las defensas civiles patrióticas "por el malentendido de que fueron objeto de parte de las autoridades y de la Iglesia".

En realidad, más que a las protestas de la Iglesia católica o de otros sectores sociales y políticos democráticos, el efímero carácter de las "defensas civiles patrióticas" debe agradecerse sobre todo a Duarte, quien en la recta final de su Presidencia, a falta de frutos más estructurales que ofrecer, parece dispuesto a desplegar este tipo de gestos menores, pero en cualquier caso plausibles. Desafortunadamente, el hecho de que la derecha se presente tan fortalecida a esta altura del proceso político salvadoreño es algo de lo cual Duarte es también responsable en alguna medida.

Represión y movilización de las organizaciones laborales

Cuando casi arribamos a la toma de posesión del nuevo gobierno electo, y con ello también a la segunda mitad del año, el ritmo de represión a los sectores populares parece mantenerse con tendencia creciente; al tiempo que el modo de ejecutar las acciones tiende también a mostrarse cada vez menos encubierto. Y, por otro lado, las declaraciones amenazantes por parte de jefes castrenses cobran cada vez un tono más fuerte y de agresión abierta a las organizaciones populares.

Tal parece que los mandos militares, y con ellos quizá toda la derecha más recalcitrante, han terminado por ser los primeros en creerse la propaganda que tan generosamente auspician para convencer a El Salvador entero de que las organizaciones populares tienen fuertes vínculos con el FMLN y que son, por ello, absolutamente condenables y merecedoras de todo tipo de violencia si acabando con ellas "se acaba con la amenaza comunista".

Como desde años atrás ha ocurrido, inútiles parecen las demandas de diálogo y negociación para acabar con la guerra, inútiles las exigencias de que cese la represión, inútiles también los innumerables campos pagados de las organizaciones populares para denunciar las cada vez más frecuentes acciones de violencia en contra de sus miembros. Esto parece haber sido así tanto frente a la dirigencia del actual como del próximo gobierno, así como ante los jefes militares que, igual que aquéllos, tienden a ir subiendo progresivamente el tono de sus declaraciones y de sus acciones. Para ambos sectores gubernamentales, los llamados de las mayorías populares parecen ser irrelevante, pese a que es, presuntamente, la voluntad y decisión de éstas su única fuente de legitimidad.

Lo más grave de tal posición es la orientación de su política y sus acciones, pero sus declaraciones tienen también una repercusión importante en el proceso nacional, por cuanto en vez de distensar, contribuyen a la polarización nacional. El gobierno saliente al menos en su discurso, que con mucha frecuencia ha rayado en el cinismo, ha intentado presentar una posición "moderada" y, en la mayor parte de casos, de no agresión; tal actitud podría haber ayudado en alguna medida a configurar el proceso nacional en una línea de menor confrontación y polarización, especialmente en el enfrentamiento de los sectores populares con el gobierno, los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada. Obviamente, la confrontación y las acusaciones se han dado ininterrumpidamente, pero el punto nuevo y preocupante está en que ésta se exacerbe y traiga más tragedia de la que ya sufre el país. Es necesario tener presente que eso significaría para el país casi la supresión de su viabilidad histórica.

Capturas y asesinatos

En este marco, la multiplicación de los casos de represión a los sectores populares constituye un índice doloroso y preocupante de cara a lo que ya ha vivido el país, y a lo que vendrá. Jorge Alberto Lara Albeño, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISSS), fue capturado y consignado a los juzgados el 1 de mayo bajo cargos de pertenecer al Partido Comunista Salvadoreño. Del mismo modo, dos miembros de FECMAFAM fueron capturadas al concluir la marcha que la UNTS realizara para conmemorar el Primero de Mayo (**Proceso 382**), según denunció el mismo día la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental (CDHES). En tanto, CRIPDES

denunció el pasado 5 de mayo el "encarcelamiento decretado por el Juez 2º de lo Penal" para ocho de sus miembros capturados.

Mientras, el cerco militar tendido y sostenido —con pequeñas interrupciones— alrededor de la Universidad de El Salvador (UES) desde diciembre pasado, continúa, y la comunidad universitaria también continúa protestando ante él. En la misma tónica de amedrentamiento a organizaciones de oposición, el Movimiento Comunal Salvadoreño, y el CCM por su parte, también han denunciado desde el pasado 6 de mayo amenazas telefónicas de muerte en contra de su dirigente fundador Leonardo Hidalgo, recibidas el día 3, de lo que responsabilizan a ARENA y al Alto Mando de la Fuerza Armada.

Consumación de esta tendencia violenta la ha constituido el asesinato de dos miembros del Sindicato de la Industria del Café (SICAFE) el pasado 11 de mayo: Pablo Obdulio Vargas, secretario de conflictos, en Chalchuapa; y David Murillo, en Santa Ana. El mismo día fue atacado a tiros, y gravemente herido, el secretario de propaganda del mismo sindicato, en la carretera entre Chalchuapa y Santa Ana, según lo ha denunciado la UNTS en un comunicado difundido el 15 de mayo. Tanto el SICAPE en su comunicado de denuncia del día 13, como la FEASIES en el suyo difundido el 16, coinciden con la UNTS en responsabilizar "a ARENA y al Alto Mando de la Fuerza Armada de los hechos denunciados..." por cuanto "desde que el Comité Ejecutivo Nacional de ARENA, COENA, y el Alto Mando de la Fuerza Armada, mediante las declaraciones de los señores Ing. Francisco Merino, Vicepresidente electo, y Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Director General de la PN y Jefe de Plaza de la zona metropolitana, se dieron a la tarea de amenazar públicamente a diversas

organizaciones, instituciones y personalidades sindicales, religiosas, universitarias y populares, los escuadrones de la muerte han intensificado sus acciones de amenazas, secuestros, asesinatos y desaparecimientos".

Conflictos y paros laborales

Pese a todo ello, la movilización reivindicativa se sostiene, al parecer esta vez centrada en el sector público. La seccional de la Región II de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Agricultura (ANTMAG), que aglutina a los empleados del MAG de Chalatenango, La Libertad y San Salvador, realizó el pasado 2 de mayo una concentración frente al ISIC para exigir que se haga efectivo el incremento salarial de 200 colones que la Asamblea Legislativa aprobó meses atrás para todos los empleos públicos, así como para protestar ante algunos casos de despidos; los trabajadores afirmaron que de no concedérselos su demanda salarial realizarían un paro. Análogamente, la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (ATMOP) ha iniciado un paro de labores, en el que presuntamente participan unos 20 mil trabajadores de ese Ministerio, en demanda de que los compromisos patronales de nivelación de salarios, dotación de equipo de trabajo y el pago de trabajo nocturno, sean implementados, según acuerdo del titular del MOP con ATMOP firmado el pasado 16 de noviembre.

Asimismo, la dirigencia de la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) ha informado que sus nueve organizaciones afiliadas de empleados públicos, que aglutinan a unos 60 mil trabajadores, se encuentran actualmente en situación de conflicto; a los casos aludidos de ATMAG y ATMOP ha añadido el de los trabajadores del Instituto

Salvadoreño de Turismo (ISTU), que demandan el pago de una bonificación que esa institución se comprometió a conceder desde el año pasado.

En el sector privado, la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) ha exigido en su comunicado del 16 de mayo "la inmediata solución a los conflictos laborales, Metalúrgica Sarti, ATMOP, ANTMAG, Sindicato Minerva Textil y STIGSCSES".

Asimismo, numerosos comunicados se han publicado en la prensa nacional escrita firmados por diversos organismos laborales, religiosos y humanitarios extranjeros para expresar que "repudian y deploran" el incremento de la represión contra los sectores populares organizados, al tiempo que exigen el cese a la misma. Tal ha sido el caso de sindicalistas de Estados Unidos, el 2 de mayo, y de Sindicatos de la República Federal de Alemania el día 9.

Pese a todo ello, los cuerpos de seguridad y los jefes militares siguen empeñados en crear cada vez más campañas de acusaciones y vinculaciones con el FMLN de las organizaciones como UNTS, COMADRES, CRIPDES, etc. Al aproximarse, ya a menos de dos semanas, la toma de poder del nuevo gobierno, el director de la Policía Nacional, coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, ha afirmado que "el FMLN-FDR se proponen la realización de una cadena de actos de agitación, desórdenes y asesinatos para

empañar el acceso al poder del nuevo gobierno". Según el militar, a organismos como los mencionados el FMLN les habrá encargado promover desórdenes, paros, huelgas y exigencias en estos días. El mismo jefe castrense ha añadido, el pasado día 9, que las investigaciones que ese cuerpo realiza apuntan a que quienes asesinaron a dos agentes de la PN al interior de un colegio capitalino, salieron de la sede de la UNTS. A ello, la UNTS ha respondido con un comunicado el pasado 11 de mayo, señalando que tales declaraciones son "sólo parte de una campaña para justificar la persecución y represión al movimiento popular".

Así las cosas, pese a los tenaces esfuerzos que los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada, junto a los Organos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, han realizado para constreñir el desarrollo de las organizaciones populares y su creciente lucha reivindicativa, éstas no parecen dispuestas a ceder nada del terreno ganado. De cara al futuro, si quienes detentan el poder en el país quieren orientar este proceso histórico en el camino de la estabilización, deberán hacer francos esfuerzos por revertir esta tendencia a incrementar la violencia contra los sectores populares, en favor de un política de satisfacción de sus más urgentes demandas. Sin embargo, la realidad cotidiana de los salvadoreños parece alejarse cada día más de ese su deber ser.

Campaña del FMLN contra ARENA

MONSEÑOR: En declaraciones ofrecidas el 14.05, después de su homilía dominical, el obispo auxiliar de San Salvador, Mons. Gregorio Rosa Chávez, defendió la evacuación de cerca de un centenar de liados de guerra del FMLN, anunciada el 04.05 por el Presidente Duarte. La evacuación ha sido adversada vehementemente por diversos funcionarios civiles, entre ellos el Fiscal General y el presidente de la Asamblea Legislativa, así como por altos jefes militares, entre ellos el director general de la Policía Nacional, Cnel. Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, quien señaló que la salida de los liados es un "golpe a la moral" de la Fuerza Armada porque ésta "tarda más en capturar a los terroristas que los tribunales en soltarlos". En relación a las críticas vertidas sobre la presunta ilegalidad de la evacuación, Mons. Rosa Chávez resaltó que "ha sido notable la falta de objetividad. El liado es aquél que aunque se cure no puede volver a combatir y, por tanto, si volverán al país no podrán incorporarse a la lucha armada. Ningún liado de los que saldrán en los próximos días está detenido. Todos están en los campos de batalla y hay normas muy claras en el derecho humanitario. Lo que hay es una campaña partiendo de premisas falsas".

Haciendo efectivas sus advertencias de intensificar el accionar militar en mayo, en vistas a desestabilizar el ascenso al poder del nuevo gobierno, las fuerzas guerrilleras ejecutaron, el pasado 10 de mayo, una serie de operaciones que marcaron el inicio de una nueva campaña militar rebelde a nivel nacional. A los mandos castrenses, por su parte, pese a haber asegurado estar preparados ante cualquier eventualidad, parece haberles tomado por sorpresa la actual campaña guerrillera y han tratado de minimizar sus reales dimensiones calificándola de "acción propagandística".

De acuerdo a fuentes rebeldes, la nueva campaña denominada "Todos contra ARENA, a luchar por la paz" constituye una "respuesta a la política de represión y a las medidas económicas antipopulares que ARENA y la tandonista están impulsando". La ofensiva guerrillera fue inaugurada con la ejecución de una maniobra militar de carácter nacional que comprendió operaciones simultáneas contra cuarteles, posiciones militares, desplazamientos de tropa e infraestructura económica.

Uno de los ataques más fuertes fue el dirigido contra los puestos militares de la Guardia Nacional localizados en Tejutepique, departamento de Cabañas. Según el parte de guerra rebelde, en el lugar se habrían ocasionado 90 bajas, entre muertos y heridos, a la Fuerza Armada (FA). Por su lado, los informes del ejército aseguran que los atacantes utilizaron fuego de lanza cohetes, lanza granadas y fusilería durante la operación, reconocieron 4 efectivos muertos y 11 heridos, y dijeron haber causado 19 bajas entre muertos y heridos al FMLN. Otro ataque fue realizado con fuego de mortero contra las instalaciones de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel, destruyendo un depósito de gasolina del cuartel. Según el comando de la unidad, los disparos fueron realizados desde 2 o más kilómetros y no causaron mayores daños. Simultáneamente unidades guerrilleras atacaron posiciones militares y los beneficios Lourdes y El Marquezado, en Santiago de María, Usulután, así como en Berlín, en el mismo departamento.

Asimismo fue atacada la casa cuartel de la Defensa Civil de El Congo, en Santa Ana, donde resultaron destruidas la guarnición, la alcaldía y una gasolinera; la

de Aguilares, al norte de San Salvador, donde también resultó una oficina de ANTEL destruida; y las posiciones militares del Destacamento Militar No. 3 en Anamorós, La Unión, donde los rebeldes aseguraron haber ocasionado 13 bajas a la FA. Otros recios y prolongados combates se registraron en Suchiloto, en Cuscatlán, y Alegría, en Usulután; mientras que otras unidades montaron una regular emboscada en la carretera de San Rafael Cedros a Ilobasco, en Cabañas, donde resultaron 3 efectivos muertos y otros más heridos.

Más ataques y hostigamientos guerrilleros de similar magnitud fueron registrados en prácticamente todos los departamentos del país. Así, se reportaron acciones en las poblaciones de San Gerardo, Chapeltique, Chirilagua, Sesori y San Luis de la Reina, en San Miguel; San Fernando, Tejutla y El Poy, en Chalatenango; Sociedad y Delicias de Concepción, en Morazán; San Ildelfonso y San Sebastián, en San Vicente; San Pedro Nonualco, en La Paz; Metapán, en Santa Ana; y Quezaltepeque, en La Libertad.

Dadas las dimensiones de la maniobra y las características de los ataques guerrilleros, con los que el FMLN demostró su gran capacidad de simultaneidad y coordinación en el accionar; en algunas zonas los combates se prolongaron hasta el día 11. Así lo reportaron voceros militares en los departamentos de Chalatenango y Cuscatlán. Finalmente, según un recuento de cifras oficiales, durante las operaciones del día 10, por lo menos 34 efectivos resultaron muertos o heridos. Por su parte COPREFA aseguró que entre el 10 y el 11 de mayo, resultaron no menos de 29 guerrilleros muertos y 46 heridos. Más tarde, informó que entre el 5 y el 12 de mayo la FA causó un total de 47 muertos y 76 heridos al FMLN.

Los días posteriores a la maniobra se registraron acciones en San Ildelfonso, en San Vicente, Guatajiagua y otras áreas en el departamento de Morazán, y un ataque con morteros, realizado el 15 de mayo, contra las instalaciones del Batallón Belloso, en Ilopango, al oriente de San Salvador.

Así la guerra, el sistemático discurso castrense sobre la debilidad e incapacidad militar del FMLN parece quedar en entredicho. Lo grave de la coyuntura militar creada con la nueva ofensiva rebelde está bastante lejos de ser un "discurso propagandístico" y la tendencia hace previsible importantes esfuerzos militares en el corto plazo por parte del FMLN.

FISCAL: El nuevo Fiscal General de la República, Dr. Mauricio Eduardo Colorado, declaró el 15.05 que "los Organos auxiliares en vez de dejar ir a los lisiados de guerra están en obligación de retenerlos porque así lo ordena la ley...los Organos Auxiliares, que son la Guardia Nacional, la Policía Nacional y de Hacienda, entre otros, deben proceder, conforme a la ley, a la captura de los presuntos culpables, les den orden o no, para la buena administración de justicia". Al propio tiempo, reiteró que si el Presidente Duarte da instrucciones para que la Fuerza Armada permita la evacuación de los lisiados, estaría cometiendo "delito de incitación a la desobediencia de las leyes". El Fiscal aclaró que desconoce si los lisiados "que se van a soltar deben algo a la justicia", pero si lo deben, entonces "el Presidente Duarte no tiene la facultad de perdonarlos". Indicó que existe un trámite legal para la salida de los lisiados de guerra y que puede ser a través de una amnistía o un indulto. "Ahora —añadió— si el Presidente de la República viola alguna de estas disposiciones legales existentes, entonces mi obligación es ponerlo en conocimiento de la Asamblea Legislativa, para que ésta decida si hay lugar o no a formación de causa. Si la Asamblea resuelve que hay lugar, entonces el Presidente quedará suspendido automáticamente de su cargo".

Amenaza de aumento en el pasaje de los buses

DUARTE: "Creo que la posición del Fiscal en cuanto a hacerme un antejuicio por la salida de los lisiados de guerra del FMLN es una actitud personal que no quisiera comentar. No se trata de poner en juego un elemento de confrontación, pues eso en nada ayuda a resolver los problemas", manifestó el 16.05 el Presidente Duarte en relación a la posición del Fiscal sobre la evacuación de los lisiados. "Lo que quiero decir con absoluta franqueza —añadió— es que he recibido la solicitud para la salida de los lisiados del señor Arzobispo de San Salvador, Mons. Arturo Rivera Damas, la cual se enmarca dentro de la ley. La Constitución da derecho a todos los salvadoreños a salir y entrar al país sin cortapisas de ninguna naturaleza, con excepción de aquéllos que tengan juicios pendientes. Por lo tanto, he solicitado al Ministerio de Justicia que revise si alguno de los lisiados tiene algún juicio pendiente. Quien lo tenga, si está imposibilitado de salir; de lo contrario, existen las leyes de Migración, las cuales exigen ciertos requisitos para dejar salir a cualquier persona. En el caso de los lisiados se sigue el mismo procedimiento" "Si quieren tomar represalias contra mí por dejar salir a los lisiados, yo creo que estaría muy satisfecho porque el pueblo entiende que un hombre lisiado es una persona que está sufriendo y se le debe considerar con ojos humanitarios".

La mañana del 9 de mayo hubo un paro del transporte urbano, como medida de presión por parte de una fracción de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), para que se le escuchen las demandas que hacen. Según uno de sus dirigentes, la solución a la crisis del transporte debe ser compartida por el gobierno, esa gremial y el usuario.

Posteriormente, el día 12, en reunión que sostuviera en un hotel capitalino, dicha fracción de AEAS acordó aumentar el pasaje de los buses, "de hecho", a 50 centavos en los buses urbanos, y 30 por ciento sobre el pasaje actual en los departamentales, lo que significaría descargar el problema sobre los hombros de los que más han estado sufriendo la pesada carga de la crisis en este país.

Se ha estimado que el 90 por ciento de la población en el área metropolitana de San Salvador (AMSS) tiene ingresos que varían de 130 a 1700 colones mensuales, y con seguridad son estas personas las que utilizan el transporte colectivo. En una encuesta que hizo el IUDOP en septiembre de 1986 (ECA No. 462) se comprobó que en promedio los capitalinos tienen que hacer 2.3 viajes para llegar a su trabajo, lo cual hace un total de 4.6 viajes al día. Con un incremento de 20 centavos sobre el pasaje, y haciendo el estimado de que en promedio viajan 2.0 personas por familia durante 26 días al mes, tendríamos que la mayoría de éstos sufrirían un aumento mensual en sus gastos de 47.84 colones, lo cual significa un incremento que va del 2.8 por ciento para los menos pobres a 36.8 por ciento para los más pobres; y, en promedio, para el 90 por ciento de la población metropolitana de más bajos ingresos, significaría un incremento equivalente al 6.4 por ciento de sus ingresos mensuales.

Considerando los ya exiguos ingresos de estos sectores, no es de extrañar que las protestas ante tales medidas no se hayan hecho esperar. En este sentido, la otra fracción de AEAS se ha pronunciado en contra, oponiéndose al incremento del pasaje, y asegurando que la mayoría de los empresarios no apoyarán las medidas. En respaldo a la posición de este grupo se ha pronunciado la Comisión Permanente de la Pequeña Empresa.

Por el lado de los sectores laborales también se han

hecho sentir los reclamos ante tal amenaza. Así, la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) expresó que rechaza cualquier aumento del pasaje, pero que sin embargo "apoya a los transportistas en su demanda de un incremento del subsidio que les otorga el gobierno". De igual manera se pronunciaron los trabajadores de la Universidad de El Salvador aglutinados en ASTUES manifestando que "los empresarios del transporte deben buscar salidas favorables con el gobierno y no aumentar el sufrimiento del pueblo". En la misma dirección se han hecho oír las voces de AGEPYM, AGEMHA, etc.

Como lo señalan los diversos pronunciamientos, la crítica situación del transporte colectivo no puede ni debe ser solucionada imponiéndole mayores cargas al pueblo, sino que más bien, por su carácter de servicio público de necesidad básica, la responsabilidad debe ser asumida por el gobierno.

Mientras tanto, el gobierno expresó su desacuerdo con las disposiciones asumidas por AEAS, a través del Director General de Transporte Terrestre, quien dijo que "en caso de que algunas empresas tomen de hecho esa decisión, serán sancionadas conforme lo estipula la ley".

Todo este embrollo de la crisis en el sector del transporte colectivo no puede verse aisladamente, fuera del contexto en que se desarrolla. En concreto, el problema guarda estrecha relación con las proporciones en que el gobierno distribuye el Presupuesto de la nación, dentro del cual los gastos de financiamiento de la guerra han sido manifiestamente privilegiados, mientras que los rubros dedicados a servicios públicos y sociales, tales como salud, educación, seguridad social, etc., han venido perdiendo terreno en las asignaciones presupuestarias. Ello es una muestra de las contradicciones entre el discurso ideológico del gobierno y la realidad de sus acciones, las cuales muestran, en este caso en materia presupuestaria, que los intereses populares no le son relevantes.

Finalmente, todo ello conduce, una vez más, a afirmar que la solución radical al problema del transporte, como en general ocurre con los principales problemas del país, ha de estar mediada por una solución política negociada al conflicto, que permita reasignar en favor del bienestar social colectivo los ingentes recursos que actualmente se destinan a la guerra.

DETENCION: El 09.05, el Juez Cuarto de lo Penal, Dr. Ricardo Zamora, decretó detención provisional contra el teniente Nelson Raúl Solano Reyes y los soldados Nicolás Angel Rodríguez y César Benjamín Caballero, bajo los cargos de homicidio doloso en el periodista Roberto Navas y homicidio doloso en grado de tentativa en el periodista Luis Rivera Galdámez. Asimismo, ordenó un embargo de 10 mil colones en bienes de los acusados. Estos integraban el retén de la Fuerza Aérea que disparó contra los periodistas mencionados la noche del 18 de marzo recién pasado, cuando los mismos cubrían el desarrollo de la coyuntura electoral.

ATENTADO: La residencia del presidente del Organó Legislativo, Lic. Ricardo Alvarenga Valdivieso, fue objeto de un atentado el 16.05 por parte de sujetos fuertemente armados, quienes dieron muerte a un agente de su seguridad. Alvarenga Valdivieso aseguró que el atentado obedece a que en los últimos días él se ha estado oponiendo rotundamente a la evacuación de unos 100 lisiados de guerra del FMLN. "Como presidente del Organó Legislativo, como diputado de ARENA, como salvadoreño, siempre he sido claro y sostengo que los terroristas del FMLN no quieren la paz, irrespetan los derechos humanos de los ciudadanos honrados, recurren al chantaje para conseguir sus nefastos propósitos y este atentado en mí contra es prueba de ello", subrayó.

¿Qué hacer con Panamá?

La compleja crisis política que sufre Panamá parece encontrarse en un callejón sin salida. Con el gobierno norteamericano como abanderado, la comunidad internacional ha rechazado y condenado las graves irregularidades experimentadas por el reciente proceso electoral. Por el momento, sin embargo, ni Estados Unidos se atreve a lanzar, ni los países latinoamericanos parecen estar dispuestos a tolerar, una intervención militar para derrocar al general Noriega.

Según sostienen los cables noticiosos, para los países latinoamericanos el dilema que el caso panameño les presenta es el de escoger entre la defensa del principio de no injerencia en los asuntos internos y de autodeterminación de los pueblos frente a la promoción del respeto al orden democrático representativo. Para Estados Unidos, en cambio, lo que parece estar en juego es, más bien, la recuperación de los derechos a perpetuidad sobre el canal y, lo que es más fundamental, el mantenimiento del control militar sobre una zona de gran valor geoestratégico.

Disturbios callejeros y anulación de los comicios

Mientras más voces internacionales se sumaban a la condena del presunto fraude en proceso, la oposición panameña incrementaba sus acciones de protesta. El 10 de mayo, durante una manifestación en la cual se exigía al gobierno el reconocimiento del triunfo en los comicios, los candidatos de la oposición a la Presidencia, Guillermo Endara, y a la segunda Vicepresidencia, Guillermo Ford, resultaron severamente golpeados al ser disueltos su marcha por grupos paramilitares afectos al gobierno. Este y otros violentos choques, protagonizados por los simpatizantes de las partes en conflicto,

registraron, además, un saldo de cuatro militares heridos, al menos un paramilitar muerto y la denuncia de unos ochenta desaparecidos.

El desborde de la violencia y el incremento del aislamiento internacional "obligaron" al gobierno a anular los resultados de las elecciones. La misma noche del 10 de mayo, la presidenta del Tribunal Electoral, Yolanda Pulice, anunciaba dicha anulación aduciendo que "el desarrollo normal de los comicios fue alterado por la acción obstruccionista de muchos extranjeros llamados por fuerzas políticas nacionales o foráneas, sin gozar de una invitación". Para la presidenta del Tribunal Electoral, el "evidente propósito de los observadores era el de avalar la tesis del fraude electoral, proclamada al mundo por las autoridades norteamericanas desde muy anterior a las elecciones".

La anulación de los resultados electorales provocó reacciones contrapuestas. Mientras que algunos observadores internacionales interpretaron el gesto como una concesión del régimen panameño a las presiones diplomáticas y, por tanto, como el punto de partida para negociar una solución a la crisis; otros, por el contrario, como los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, descalificaron la medida por considerar que la misma desconocía "la voluntad del pueblo panameño expresada libremente".

Envío de los marines y presiones diplomáticas

La respuesta de Washington a la precipitación de todos los sucesos anteriores se manifestó, en primer lugar, con la elevación de la retórica contra el régimen de Noriega. No obstante, las medidas concretas adoptadas hasta el momento poseen un carácter simbólico y han sido calificadas por la propia

prensa estadounidense como muy "prudentes".

El 11 de mayo, el presidente Bush ordenó el traslado a Panamá de unos 2,000 infantes de marina que reforzarían a los casi 12,000 efectivos ya estacionados en ese país. Esta medida estaría orientada, según Bush, a garantizar la defensa de las vidas y de los intereses estadounidenses en Panamá. Asimismo, el personal civil norteamericano fue movilizado hasta las bases militares como un paso previo para su evacuación. Por otra parte, dentro de un conjunto de medidas diplomáticas, el embajador Arthur Davis fue llamado a consultas a Washington y el personal de la embajada reducido al mínimo.

La actual crisis panameña ha motivado un amplio debate dentro de los círculos de poder norteamericanos respecto de las opciones reales que tiene la Casa Blanca para manejar a su favor la resolución de la crisis panameña. Tal debate ha generado, al parecer, un importante consenso entre los estrategas ultraconservadores y los que lo son menos. El primer punto de consenso lo constituye la aceptación de la inconveniencia política de una intervención militar. Sol Linowitz, uno de los arquitectos de los tratados Carter-Torrijos, opina al respecto que "Estados Unidos no puede presentarse otra vez a la opinión pública como un país intervencionista, porque los efectos de esa política serían terribles a mediano y largo plazo". Fred Ikle, por su parte, un importante funcionario del Pentágono durante la anterior administración, sostiene que "el enfrentamiento abierto con el General Noriega podría llevar a un régimen más hostil y crear mayores problemas para los intereses de

seguridad de Estados Unidos". En consecuencia, el segundo punto de consenso estriba en la convicción de que es necesario para el gobierno estadounidense el apoyo de la comunidad internacional para lograr la salida de Noriega del poder y obtener una recomposición del sistema político actual de Panamá. En efecto, si algo parece estar claro en el prolongado desenvolvimiento de la crisis panameña es que la deposición de Noriega únicamente puede provenir del aislamiento internacional de su régimen o del surgimiento de fisuras en la estructura de poder de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Esto último es algo que hasta la fecha ha sido sumamente improbable.

Bush ha impulsado, en el marco de dicho consenso, la condena internacional a Panamá, buscando especialmente que le respalden los países latinoamericanos. La respuesta de éstos ha sido, hasta ahora, fragmentada y ambigua, aunque en los últimos días se ha desplegado una intensa actividad diplomática con el propósito de alcanzar una postura unificada. En este sentido, un primer comunicado del Grupo de los Ocho sobre el problema panameño ha sido sumamente cauteloso. Venezuela, sin embargo, que parece compartir los planteamientos de Washington sobre la crisis en cuestión, ha solicitado la realización de una asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir y alcanzar un consenso hemisférico sobre el conflicto en Panamá. El estudio de la situación panameña por parte de los 31 cancilleres del continente tiene como desafío el contribuir a la solución del conflicto desde los intereses y las necesidades propias de América Latina.

PRESENTACION

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales.

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e Información de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

SUSCRIPCION ANUAL

El Salvador	
personal	¢ 50.00
correo	¢ 60.00
Centroamérica y Panamá	\$ 25.00
Norte y Sur América	\$ 35.00
Europa	\$ 40.00
Otras regiones	\$ 45.00

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 236375 y 240011 Ext. 161 y 191.

